



SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, trece (13) de abril de dos mil veintiuno (2021)

Proyecto discutido y aprobado en sala virtual

Demandante: JUAN IGNACIO GARCÍA VÁSQUEZ
Demandado: ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PROTECCIÓN S.A.
Radicado: 05001 31 05 017 2019 00705 01
Sentencia: S-068

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en éste acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a resolver el RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la sociedad demandada, en contra de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Medellín el día 12 de mayo de 2020.

De acuerdo a lo dispuesto en el numeral primero del artículo 15 del Decreto Legislativo 806 del 4 de junio de 2020, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

PRETENSIONES

JUAN IGNACIO GARCÍA VÁSQUEZ demandó a PROTECCIÓN S.A., para que sea condenada al reconocimiento y pago de la pensión de

invalidez de origen común, además de los intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993, la indexación y las costas del proceso.

HECHOS

Expone como fundamento de sus peticiones, que nació el 28 de febrero de 1980; que sufre de esquizofrenia paranoide; que la entidad demandada, con apoyo en la compañía Suramericana de Seguros de Vida S.A., emitió dictamen de pérdida de capacidad laboral en el que se determinó un porcentaje de 33.8%; que al resolver el recurso presentado, la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia emitió un nuevo dictamen en el que estableció una pérdida de capacidad laboral de 65.40% estructurada el 17 de octubre de 2013; que su solicitud de pensión de invalidez fue negada por no acreditar 50 semanas en los 3 años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez; que por tratarse de una enfermedad crónica, congénita o degenerativa, tiene derecho a que le sean reconocidas las semanas de cotización posteriores a la fecha de estructuración, realizadas en virtud de una capacidad laboral residual; que en toda su vida laboral cuenta con 403.15 semanas cotizadas; y que con ocasión de una acción de tutela presentada, le fue reconocida la pensión de invalidez de manera transitoria según sentencia proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito para Adolescentes.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Al contestar, PROTECCIÓN S.A. acepta lo relacionado con los dictámenes de calificación de pérdida de la capacidad laboral realizados, la decisión de la entidad de negar la pensión de invalidez y el reconocimiento transitorio de la prestación en virtud de la acción de tutela que se interpuso. Dice que no le consta la fecha de nacimiento, la enfermedad y lo que tiene que ver con la capacidad laboral residual que refiere. Explica que la enfermedad que padece el demandante no

puede ser considerada como de alto costo, así como tampoco catastrófica, degenerativa o progresiva, que permita entender como viable la existencia de una capacidad residual. Agrega que el número de semanas cotizadas es de 351.42, ya que las posteriores a la estructuración fueron devueltas a sus empleadores. Se opuso además a las pretensiones de la demanda, proponiendo como excepciones las que denominó inexistencia de obligación alguna frente a PROTECCIÓN S.A., plena validez de los dictámenes emitidos, inexistencia de la declaratoria de nulidad, falta de agotamiento del procedimiento legal para controvertir el dictamen, variación de la condición clínica del paciente con posterioridad al dictamen, improcedencia de la prestación solicitada, exequibilidad del requisito de 50 semanas, no cobertura del seguro previsional para la financiación de la pensión, falta de causa para demandar, pago, compensación, prescripción, entre otras.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia proferida el 12 de mayo de 2020, el Juzgado 17 Laboral del Circuito de Medellín CONDENÓ a PROTECCIÓN S.A. a reconocer y pagar al demandante la pensión de invalidez causada a partir del 24 de octubre de 2016, cuyo retroactivo pensional calculado hasta el 31 de agosto de 2019, asciende a la suma de \$28.577.648 y a seguir pagando, de manera definitiva, una pensión equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. CONDENÓ además a la entidad a la indexación de las condenas y la ABSOLVIÓ de los intereses moratorios y de las costas del proceso.

DEL RECURSO DE APELACIÓN

Inconforme con lo decidido, la apoderada de PROTECCIÓN S.A. interpuso recurso de apelación indicando que en el proceso quedó demostrado que la esquizofrenia que padece el demandante no es una enfermedad de carácter degenerativo, sino que es de neurodesarrollo.

Agrega que no es posible cambiar la fecha de estructuración según lo señalado por la Corte Suprema de Justicia, ya que lo que se busca es que en los casos de enfermedades congénitas o degenerativas, se tenga en cuenta la capacidad laboral residual y los periodos cotizados con posterioridad a la fecha de estructuración hasta que definitivamente se vea materializada esa pérdida de capacidad laboral, lo que debe ser probado dentro del proceso, es decir, probar que efectivamente se ha perdido esa capacidad laboral residual, sin que nada al respecto haya sido demostrado en el proceso, por lo que no hay lugar al reconocimiento de la pensión de invalidez que se reclama.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

En esta instancia, una vez surtido el traslado respectivo, PROTECCIÓN S.A. presentó dentro del término alegatos de conclusión reiterando los mismos argumentos que presentó en el recurso de apelación. Agrega que dentro del presente proceso no se aportaron pruebas que demuestren que el señor JUAN IGNACIO haya tenido una capacidad laboral residual, y mucho menos que para la fecha de la última cotización al Sistema o la fecha determinada por la juez de instancia, se haya terminado esa capacidad residual de la que habla la Corte en sus sentencias; y que no es lógico que se solicite un cambio en la fecha de estructuración cuando el demandante estuvo conforme con lo que en ese mismo sentido había señalado COLPENSIONES para el otorgamiento de la pensión de sobrevivientes por la muerte de su madre.

CONSIDERACIONES:

Tal como viene de sintetizarse, el señor JUAN IGNACIO GARCÍA VÁSQUEZ aspira con la presente acción judicial le sea reconocida la pensión de invalidez de origen común por sufrir una pérdida de capacidad laboral superior al 50%, y al acreditar más de 50 semanas

de cotización en los últimos 3 años anteriores a la fecha de estructuración, teniendo en cuenta hasta la última semana efectivamente cotizada en virtud de la capacidad laboral residual.

A esa pretensión se opone PROTECCIÓN S.A., quien considera que no hay lugar al reconocimiento de la pensión de invalidez, pues tal y como lo resolvió administrativamente, el demandante no cumple con el requisito de 50 semanas en los 3 años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez, que no es otra que la definida por la Junta Regional de Calificación de invalidez, sin que pueda hablarse de capacidad residual ya que la enfermedad que padece no es de carácter degenerativo.

A efectos de resolver la cuestión planteada, es preciso indicar que en el plenario está acreditado que, efectivamente, el Sr. GARCÍA VÁSQUEZ padece una pérdida de capacidad laboral superior al 50%, lo que en principio la haría acreedor a la pensión de invalidez que reclama, pues en los términos del artículo 38 de la ley 100 de 1993, *“Se considera invalida la persona que por cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral”*.

Así se advierte del contenido del dictamen de calificación de pérdida de capacidad laboral realizado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia en el que se pueden evidenciar las siguientes situaciones: **i)** el dictamen data del 12 de enero de 2018; **ii)** en él se determinó una pérdida de capacidad laboral de 65.40%; **iii)** la fecha de estructuración fue establecida en el 17 de octubre 2013; y **iv)** el diagnóstico registrado fue *“Esquizofrenia paranoide”*.

Efectivamente, si la fecha que se tiene en cuenta para efectos de analizar el total de cotizaciones que se exigen para el reconocimiento de la pensión de invalidez, es la definida por la Junta Regional, no habría lugar al reconocimiento de la prestación en tanto en los 3 años

anteriores al 17 de octubre de 2013 únicamente se registran cerca de 10 semanas de cotización, cuando el requisito, en los términos del artículo 39 de la ley 100 de 1993, modificado por el artículo 1 de la ley 860 de 2003, es de 50 semanas.

Sin embargo, no se puede desconocer que, de acuerdo al criterio ampliamente desarrollado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el Juez puede apartarse del contenido de los dictámenes emitidos por las Juntas de Calificación de Invalidez o por cualquiera de las entidades del sistema según sea el caso, por cuanto no se trata precisamente de una prueba solemne, frente a la cual los interesados deban someterse en su rigor.

Significa lo anterior, en los términos de la propia jurisprudencia de la Corte, que al juzgador le es permitido *"... conforme a la potestad de apreciar libremente la prueba, acoger aquellos elementos de convicción que le den mayor credibilidad o lo persuada mejor sobre cuál es la verdad real y no simplemente formal que resulte del proceso"*, (sentencia del 18 de marzo de 2009, radicado 31062).

De la historia laboral del demandante aportada al expediente desde la demanda misma, es posible evidenciar que en su vida laboral realizó cotizaciones, como trabajador **dependiente y subordinado**, incluso con posterioridad a la fecha de estructuración que determinó la Junta Regional, es decir, más allá del 17 de octubre de 2013, haciendo cotizaciones así: (i) Hasta el 22 de diciembre de 2013 en la empresa TEMPORALES ARCO LTDA; (ii) posteriormente, como trabajador de ADECCO COLOMBIA S.A. en los meses de junio y julio de 2014; (iii) continúa luego con "SISTEMAS INTEGRALES DE ALTA..." desde el mes de noviembre de 2014 hasta el 6 de julio de 2015, (iv) luego, en octubre y noviembre de 2015 con la empresa MECHATRONIC SUPPORT S.A.S.; y (v) finalmente, registra cotizaciones por 23 días en el mes de marzo de 2016 con la empresa IMPROMIX S.A.S., cotizaciones que sin duda reflejan la existencia de esa capacidad

residual que se propone con la demanda, por un total en toda la vida laboral de 403.15 semanas cotizadas, y en los 3 años anteriores a la fecha en que dejó de hacer la última cotización, de 53.57 semanas cotizadas, esto es, entre el 23 de marzo de 2013 y el 23 de marzo de 2016, mismo resultado obtenido en primera instancia, aun cuando allí se tuvo en consideración como fecha el 24 de octubre de 2016.

El anterior panorama da a entender que a pesar de tener una enfermedad crónica -como se analizará más adelante- altamente incapacitante al tratarse de esquizofrenia paranoide, el Sr. JUAN IGNACIO estuvo económicamente activo y productivo, y por ello pudo cotizar eficazmente al sistema de pensiones hasta el mes de marzo de 2016 en calidad de empleado dependiente, tal y como se demuestra con el resumen de su historia laboral.

Frente a la situación concreta relacionada con la fecha de estructuración propiamente dicha, la jueza de primer grado hizo un completo estudio acerca de la línea jurisprudencial trazada, tanto por la Corte Constitucional como por la Corte Suprema de Justicia, en el sentido de que cuando de una enfermedad de deterioro degenerativo, crónico o progresivo se trata, o incluso de enfermedades congénitas, la estructuración de la invalidez no necesariamente coincide con la fecha de la primera consulta, o de aquella en que se manifestó el primer síntoma, sino, cuando realmente se da la pérdida de capacidad laboral. Dicho de otro modo, existen una serie de enfermedades que, a pesar de ser diagnosticadas, le permiten a la persona seguir desempeñando su respectiva profesión u oficio, sea material o intelectual, de manera indeterminada, circunstancia que, de darse, a juicio de la Sala, no podría entonces entenderse que esa persona sea señalada, aún, como inválida.

En este sentido, en efecto, la jurisprudencia tanto ordinaria como constitucional, ha sido insistente en ordenar la protección de quienes se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta, quienes por

tal situación son considerados sujetos de especial protección. Es así como se ha dicho en sentencias como la SU-588 de 2016 y más recientemente en la sentencia T-668 de 2017, por ejemplo, que *“la jurisprudencia constitucional ha establecido que en el caso de las personas que padecen de una enfermedad congénita, **crónica** o degenerativa, se deberán tener en cuenta las semanas cotizadas con posterioridad a la fecha de estructuración del estado de invalidez, reconociendo la capacidad laboral residual de quien a pesar de su enfermedad, ejerció una actividad productiva..”*

Debe advertirse que la patología diagnosticada al demandante no le impidió desarrollar una vida laboral productiva durante algunos periodos que sumaron más de 50 semanas de cotización, lo que da cuenta el historial de cotizaciones como previamente se indicó, pudiéndose entender que efectivamente se puede calificar como una enfermedad crónica, sujeta al paso del tiempo, que permite dar aplicación a la tesis sostenida en los múltiples pronunciamientos de la Corte Constitucional.

No resulta admisible entonces que se diga que por tratarse de una enfermedad que no es degenerativa o congénita, no se puede dar aplicación a este criterio jurisprudencial, pues allí se tiene establecido que también opera cuando de enfermedades crónicas se trata, como es precisamente la *esquizofrenia paranoide* que sufre el demandante, tal y como lo explicó la propia perito traída al proceso por la entidad demandada, Dra. CARMIÑA PÉREZ RESTREPO en la audiencia llevada a cabo en primera instancia, en la que sostuvo lo siguiente: *“Se considera una enfermedad crónica. La esquizofrenia no está definida como una enfermedad degenerativa como tal; la esquizofrenia no se conoce su causa; dentro de las últimas teorías que se vienen estableciendo, es que se puede tratar de una enfermedad de alteraciones del neurodesarrollo del cerebro, por eso inicia en la adolescencia generalmente y su pronóstico y evolución es diferente para cada paciente”*.

Nótese como en esos pronunciamientos de la Corte Constitucional, entre los que se destacan los realizados en sentencias T-699A de 2007, T-163 de 2011, T-885 de 2011, T-138 de 2012, T-262 de 2012, T-572 de 2013, T-043 de 2014, T-444 de 2015, T-412 de 2016, T-469 de 2018 o más recientemente la T-484 de 2019, lo siguiente:

*“Con base en las anteriores consideraciones es viable concluir que, cuando una entidad estudia la solicitud de reconocimiento de una pensión de invalidez de una persona que padece una enfermedad **crónica**, degenerativa o congénita, a quien se le ha determinado una fecha de estructuración de invalidez en forma retroactiva, deberá tener en cuenta los aportes realizados al Sistema durante el tiempo comprendido entre dicha fecha, y el momento en que la persona pierde su capacidad laboral de forma permanente y definitiva. Es decir, la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral debe alcanzar un grado de determinación que refleje la situación médica y laboral real de la persona.”*

Adicionalmente, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencias, además de la SL 3275 del 14 de agosto de 2019, rad. 77459, SL 5601 de 2019, SL 4565 de 2019, o SL 770 del 5 de febrero de 2020 citadas por la funcionaria a quo, así como en otras más recientes como la SL 3161 del 26 de agosto de 2020, rad. 70581, la SL 4346 del 14 de octubre de 2020, rad. 84640 o la SL 198 del 20 de enero de 2021, rad. 51537, ha venido desarrollando ese mismo criterio desde el cambio jurisprudencial adoptado en la sentencia SL 3275 del 14 de agosto de 2019, en la que se dijo:

*“Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de Salud (OPS), debido a sus características las enfermedades de tipo **«crónico»** son de larga duración y progresión generalmente lenta, y se catalogan como una patología para la cual «aún no se conoce una solución definitiva y el éxito terapéutico consiste en tratamientos paliativos para mantener a la persona en un **estado funcional**, mediante el consumo constante de fármacos (...); dichas enfermedades, hoy por hoy, son las causantes de la mayoría de muertes y de discapacidades mundiales».*

De acuerdo con dicha organización, las enfermedades crónicas incluyen un grupo de padecimientos y condiciones que, a pesar de tener manifestaciones clínicas diversas, comparten algunas características básicas comunes, como son su persistencia, el requerir manejo durante años o decenios y el hecho de que desafían seriamente la capacidad de los servicios de salud¹. Se caracterizan también por tener «estructuras causales complejas mediadas por múltiples condiciones de exposición, periodos de latencia largos, evolución prolongada, relativa incurabilidad, y carácter degenerativo» que, sin manejo adecuado, generan discapacidad o alteración funcional, con la consecuente pérdida de autonomía del sujeto afectado.

(...)

Es por todo lo anterior que en casos en los que las personas con discapacidad relacionada con afecciones de tipo congénito, crónico, degenerativo o progresivo y que tienen la posibilidad de procurarse por sus propios medios una calidad de vida acorde con la dignidad humana pese a su condición, deben ser protegidas en aras de buscar que el sistema de seguridad social cubra la contingencia de la invalidez, una vez su estado de salud les impida seguir en uso de su capacidad laboral, derechos que, se itera, sí están reconocidos a los demás individuos

Ahora bien, en aras de evitar el fraude al sistema general de pensiones y, a su vez, garantizar su sostenibilidad fiscal, es necesario, en cada caso, ponderar varias aristas del asunto a dilucidar, tales como el dictamen médico, las condiciones específicas del solicitante, la patología padecida, su historia laboral, entre otras, pues precisamente en razón a que el afiliado puede trabajar y, producto de ello, cotizar al sistema durante el tiempo que su condición se lo permita, es necesario corroborar si los aportes realizados se hicieron con la única finalidad de acreditar las semanas exigidas por la norma o si, por el contrario, existe un número importante de ellos resultantes de una actividad laboral efectivamente ejercida.

Es decir, es necesario examinar si las cotizaciones efectuadas después de la estructuración de la invalidez fueron sufragadas en ejercicio de una real y probada capacidad laboral residual del interesado, y no, que se hicieron con el único fin de defraudar al sistema de seguridad social.

(...)

¹ Documento técnico del proyecto de desarrollo de autonomía para la prevención y control de las condiciones crónicas en el distrito capital plan de intervenciones colectivas. SDS. 2009.

la Sala Plena recuerda que los requisitos exigidos por la Ley 860 de 2003 buscan evitar el fraude al sistema y garantizar su sostenibilidad fiscal. Sin embargo, frente a la existencia de aportes importantes realizados con posterioridad a la fecha de estructuración de la invalidez, en ejercicio de una efectiva y probada capacidad laboral residual, la sostenibilidad del sistema no se ve amenazada, en tanto ésta (sic) sea clara y así se determine en cada caso en concreto. En estos casos, no existe la pretensión de defraudar, sino que el fin legítimo de la solicitud es el reconocimiento de un derecho prestacional, que se encontraba asegurado y para lo cual se cotizó durante un tiempo, pues el propósito de la pensión de invalidez no es otro diferente que garantizar un mínimo vital y, en esa medida, una vida en condiciones de dignidad de personas que, debido a una enfermedad o un accidente, se encuentran en situación de discapacidad.

Por todo lo anterior, se trata de una interpretación inspirada en los principios constitucionales de dignidad humana y de igualdad, así como en el deber de garantizar el acceso al trabajo por parte de las personas en situación de discapacidad, el cual, se encuentra consignado en la Carta y fue desarrollado por la Ley 361 de 1997, ya que como se estableció en párrafos anteriores, no parece lógico que el Estado propenda por la inclusión laboral de estas personas, pero impida que accedan a las garantías propias de los trabajadores, desconociendo entonces, la capacidad laboral residual con la cual cuentan.

Se reitera, en el presente caso existe clara evidencia en cuanto a que el actor continuó desempeñando su actividad laboral mucho tiempo después de aquel 13 de octubre de 2013, sin que se presente en este caso una situación tendiente a defraudar el sistema en la medida que las cotizaciones posteriores con los empleadores ya mencionados, se efectuaron como consecuencia de diversas relaciones laborales dependientes que se mantuvieron según las posibilidades de salud del actor y hasta el día 23 de marzo de 2016.

La capacidad laboral de una persona, se recuerda, está asociada al conjunto de destrezas, habilidades, aptitudes y/o potencialidades de orden físico, mental y social que le permitan desempeñarse en su trabajo habitual; y se entiende por trabajo habitual, aquel oficio, labor u ocupación que desempeña el individuo con su capacidad laboral,

entrenamiento y/o formación técnica o profesional, recibiendo una remuneración equivalente a su salario o renta y por el cual cotiza al Sistema Integral de Seguridad Social, según definición del art. 2º del Dto. 917 de 1999.

Adicionalmente, tampoco resulta admisible la tesis que plantea la entidad demandada cuando señala que existe otro dictamen emitido por COLPENSIONES en el que se estableció una fecha de estructuración distinta, ya que nada al respecto se planteó con la contestación a la demandante y mucho menos se acreditó en el expediente, siendo su carga probatoria cualquier demostración al respecto, aunque de todas maneras la decisión que en este caso se adopta tiene como fundamento el criterio jurisprudencial ampliamente explicado respecto a la capacidad laboral residual del afiliado derivada de la enfermedad crónica que padece.

Mucho menos es de recibo que se diga que resulta indispensable para el demandante demostrar que se ha perdido esa capacidad laboral residual para poder entender que la invalidez se ha configurado. El entendimiento apropiado a la interpretación jurisprudencial que se está aplicando, parte de la base de una invalidez ya establecida, pero que en ciertas circunstancias especiales, no impiden al afiliado continuar laborando y realizando aportes, casos en los que la fecha de estructuración puede variar a: *"(i) la calificación de dicho estado, (ii) la de solicitud de reconocimiento pensional o (iii) la de la última cotización realizada -calenda donde se presume que la enfermedad se reveló de tal forma que le impidió seguir trabajando»,"*

Si bien la Sala considera que en este caso la fecha a tener en cuenta tendría que ser la que corresponde al momento en que el demandante no pudo materialmente volver a trabajar, es decir, cuando se realizó la última cotización al sistema en marzo de 2016, como nada al respecto se dijo por la parte actora y ante la imposibilidad de adoptar una decisión más gravosa para la entidad en virtud del principio de la

no reformatio in pejus, la fecha adoptada en primera instancia en el 24 de octubre de 2016, se deberá mantener.

En consecuencia, al no existir elementos que permitan a la Sala apartarse de lo indicado por la Jueza de primera instancia en su sentencia, la decisión en cuanto se reconoció la pensión de invalidez al señor JUAN IGNACIO GARCÍA VÁSQUEZ desde el 24 de octubre de 2016, deberá ser confirmada, advirtiéndose que desde el mes de septiembre de 2019 el actor viene disfrutando de una pensión de invalidez transitoria o temporal reconocida en virtud de una decisión adoptada dentro del trámite de una acción de tutela, proferida el 5 de septiembre de 2019 por el Juzgado Tercero Penal del Circuito para Adolescentes de Medellín, la que a partir de ahora pasará a ser definitiva, eso sí, hasta tanto se mantengan las causas que le dieron origen en los términos del artículo 44 de la ley 100 de 1993

Costas en esta instancia a cargo de PROTECCIÓN S.A., cuyas agencias en derecho se fijan en la suma de \$908.526.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

R E S U E L V E:

CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 17 Laboral del Circuito de Medellín el día 12 de mayo de 2020.

Costas en esta instancia a cargo de PROTECCIÓN S.A., cuyas agencias en derecho se fijan en la suma de \$908.526.

05001 31 05 017 2019 00705 01

Lo resuelto se notifica por ESTADOS en los términos del art. 295 del Código General del Proceso.

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE MEDELLÍN – SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados N° 061
del 14 de abril de 2021

Consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>

Firmado Por:

JOHN JAIRO ACOSTA PEREZ

MAGISTRADO

MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

JAIME ALBERTO ARISTIZABAL GOMEZ

MAGISTRADO

MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

FRANCISCO ARANGO TORRES

MAGISTRADO

MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **c09cfe5e0e57a7c9c3d5742d6e906970a309b3c072065185c20b15aba07c2c78**

Documento generado en 13/04/2021 02:25:25 PM